

CAPÍTULO 4

Las voces de la economía popular: problemáticas en pandemia y desafíos ante el Estado

NATIVIDAD GONZÁLEZ,^{*} FLORENCIA NIEVA^{**} y LILIANA BERGESIO^{***}

4.1 Introducción

La irrupción en Argentina de la pandemia de COVID-19 y las medidas de prevención a comienzos del 2020, significaron un cambio sumamente drástico en las lógicas y los espacios de trabajo y de los hogares. En este contexto de suspensión de todas las actividades que requerían el tránsito en la vía pública y la aglomeración de personas, entre los grupos más afectados estuvieron quienes trabajan en la economía popular (Nieva *et al.* 2021). Principalmente, por los cambios en la circulación comercial de productos del campo a la ciudad, la prohibición del uso del espacio público y la transformación de los espacios sociocomunitarios en lugares de contención indispensable para los barrios populares en materia de salud, educación y alimentación.

Entre las características de la economía popular, se encuentran la creatividad, la reinención constante, la necesidad de sobrevivir, el escaso poder económico, la gran prevalencia de personas con bajo nivel educativo, la venta de la fuerza de trabajo y algunas particularidades de los territorios donde se desarrollan (Bergesio y González 2020; González 2022). Esto le imprime una realidad sumamente heterogénea, aunque siempre ligada a la coyuntura.

* Investigadora CONICET - UNJu.

** Becaria doctoral CONICET- UNJu.

*** Investigadora UNICCS/CISOR-UNJu.

La relación con el Estado también es compleja, ya que se trata de problemáticas, actores y territorios diversos. A nivel nacional, y a raíz de las medidas de prevención del COVID-19, se implementaron una batería de políticas públicas de transferencia, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el aumento de quienes percibían el Programa Potenciar Trabajo, además de las acciones generadas por los gobiernos provinciales y municipales, a veces en consonancia y otras en discordancia con el Estado nacional.

Sin embargo, las voces de los actores protagonistas no se vieron reflejadas ni en el diseño ni en la implementación de estas políticas. En este marco, los/as trabajadores/as de la economía popular generaron diversas estrategias para sortear las dificultades económicas a las que se vieron enfrentados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Este trabajo buscará describir de qué forma se da la articulación entre actores (organizaciones, cooperativas y asociaciones) de la economía popular y distintos ámbitos y niveles estatales. Como hipótesis general planteamos que las dificultades que existen para que esa relación sea estable, fructífera y positiva se fundan en características estructurales del sector, las que se hicieron evidentes durante el tiempo de pandemia; así buscamos describir estas problemáticas, las iniciativas y aprendizajes emprendidos a partir de estas y los desafíos que se vislumbran hacia el futuro por parte de referentes/as de la economía popular. Con ello, luego, buscamos identificar y reflexionar sobre las principales instancias de relación con los distintos niveles del Estado.

Para ello, se parte del análisis de trece entrevistas realizadas en septiembre de 2021 a referentes barriales y/o territoriales de la economía popular de Argentina en el marco del Proyecto Pisac/COVID-19 085, alojadas en un repositorio nacional. Nos situamos desde una postura metodológica, epistémica y política (Clifford 1991) que busca rescatar las voces de las personas entrevistadas (Nash 2008) con el objetivo de recuperar los testimonios de quienes no pudieron expresar su situación, necesidades y saberes que podrían haber representado una alternativa ante la crisis; voces que fueron acalladas por otras (los medios hegemónicos y el Estado), con datos e información casi abrumadora. Es importante recordar que las medidas de prevención del COVID-19 también implicaron la imposibilidad de realizar convocatorias (asambleas, marchas, entre otras), siendo el método básico que tienen los sectores populares para hacer oír sus reclamos ante el Estado (lo que comúnmente se llama, «ganar la calle»). Por ello, en este trabajo se busca recuperar esas voces acalladas durante la pandemia, construyendo un texto polifónico que se centra en la experiencia de quienes conforman la economía popular.

Ellas dan cuenta del reclamo generalizado por la falta de reconocimiento a la economía popular como un trabajo, del desfasaje entre los tiempos del Estado (burocrático) y las necesidades (muchas veces acuciantes) y del desconocimiento general sobre el sector por parte de funcionarios; contrariamente, las situaciones en que las respuestas fueron acertadas y pertinentes se verifican a partir de trayectorias personales de agentes estatales específicos. Estas entrevistas, además, muestran que estas personas manejan definiciones y herramientas muy precisas sobre los distintos niveles estatales y sus lógicas.

También se puede notar la existencia de negociaciones con el Estado nacional en materia de transferencia de recursos y políticas públicas de contención en el marco de la pandemia. Con los Estados provinciales y municipales, en cambio, las relaciones redundan en tensiones y disputas por espacios, recursos y sentidos de construcción discursiva alrededor de la economía popular, en una relación con claras implicancias territoriales.

4.2 Metodología

Se trabajó con trece entrevistas realizadas a referentes de la economía popular de todo el país. La elección de referentes estuvo dirigida a poder captar un panorama más amplio que aquel vivido en forma particular, ya que ellos y ellas tenían conocimiento de situaciones que vivían las personas que integran su organización. Esto, sin embargo, no habilita a suponer que se trata de una muestra representativa del universo de la economía popular; es por ello que lo dicho se referencia a cada entrevista (y esta está contextualizada en el cuadro 4.1).

Esta precaución metodológica, unida a la opción de dar lugar a las voces que no fueron escuchadas, impone un texto en el que los apartados (como segmentos de información) se realizaron con el objetivo de ligar, en un hilo conductor, la información con la que contamos las autoras. Dicho esto, el último apartado (donde se analiza la relación con el Estado) sí responde a un tipo de escritura donde nuestra autoría toma lugar frente a lo rescatado de las entrevistas.

Las entrevistas fueron realizadas por miembros de la red PIRC-ESA para el proyecto PISAC. Todas las personas entrevistadas fueron informadas de este propósito, y todas prestaron consentimiento a ser grabadas, aunque algunas prefirieron no dar sus nombres. Aquí citamos cada entrevista según las recomendaciones del Repositorio y entrevistas PIRC-ESA (anexo 1).

Para rescatar la voz de las personas entrevistadas, en este texto emplearemos las comillas cuando se trate de copia textual de lo dicho

y para facilitar la lectura entre paréntesis se citará la entrevista de origen de cada cita, indicada con la letra E y su número.

Cuadro 4.1. Caracterización de referentes de economía popular, según entrevistas citadas.

E n.º	Sexo	Actividad en EP	Referente de	Localidad y provincia
1	Varón	Recuperador urbano	Cooperativa	Mar del Plata, Buenos Aires
2	Mujer	Sociocomunitaria	Comité barrial	Mar del Plata, Buenos Aires
3	Mujer	Vendedora ambulante	Mov. social	San Salvador de Jujuy, Jujuy
4	Varón	Producción agrícola	Asociación y técnico	San Antonio, Jujuy
5	Mujer	Producción agrícola	Mov. social y funcionaria	La Plata, Buenos Aires
6	Mujer	Sociocomunitaria	Mov. social y funcionaria	La Plata, Buenos Aires
7	Varón	Sociocomunitaria	Mov. social	Córdoba, Córdoba
8	Varón	Producción agrícola	Mov. social	Lavalle/Santa Lucía, Corrientes
9	Mujer	Artista callejera	Mov. social	Corrientes, Corrientes
10	Mujer	Vendedora callejera	Mov. social	Resistencia, Chaco
26	Mujer	Producción agrícola	Org. campesina indígena	Palpalá, Jujuy
63	Mujer	Sociocomunitaria	Agrupación	San Martín, Mendoza
66	Mujer	Sociocomunitaria	Coop. agroalimentaria	Lavalle, Mendoza

Fuente: repositorio de entrevistas PIRC-ESA. Proyecto PISAC-COVID 085.

El subgrupo de economía popular del proyecto realizó un esquema general de entrevistas, en pos de garantizar su comparabilidad, por lo que se trató de entrevistas estructuradas (con un esquema similar al expuesto en este texto), aunque luego, en todos los casos, su aplicación tuvo un carácter semiestructurado, ya que la técnica de la entrevista impone que se profundicen temas que surgen en la conversación y, quizás, no estaban previstos. Esto no invalida su comparación, sino al contrario, enriqueció notablemente el corpus, ya que, a la información básica – estructurada – se sumó información propia de la actividad o región de la persona entrevistada.

La lectura de las entrevistas implicó la realización de un fichado temático de ellas (dada la cantidad) y luego se ordenó la información de acuerdo al esquema planteado. Con esto remarcamos que otras lecturas de las entrevistas con otros objetivos son posibles, enfatizando la riqueza de información que brindan las técnicas cualitativas.

4.3 Caracterización del sector y sus actores

«... siempre que salimos a la calle a luchar, siempre nos dicen que somos piqueteros, planeros, y no es así... porque no es que yo era piquetera... no decidimos ser piqueteros, eso es lo que algunas veces me molesta porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras... tenemos un trabajo, somos vendedores ambulantes, los compañeros que están en la construcción tienen un trabajo, todos nosotros tenemos un trabajo inventado» (E3).

Si bien existe cierto consenso sobre qué es la economía popular, cuando se trata de *hilar fino* se advierte que esta denominación engloba a múltiples actores, actividades y procesos socioeconómicos de distinta naturaleza; además que se solapa con las definiciones de economía social, de la informalidad y otra gama de formas que no se ajustan totalmente a la economía capitalista. Es por ello que se suele emplear como etiqueta para la otra economía,^[1] la alternativa, la no hegemónica, aquella que es posible «con ingenio y sin dinero»,^[2] la que busca satisfacer necesidades propias y ajenas, la que se realiza «organizados» (como lo expresan varias personas entrevistadas).

Por lo tanto, atendiendo a esta imbricada cuestión de definición teórica, en este trabajo, con un objetivo descriptivo, proponemos caracterizar qué hacen quienes afirman pertenecer a la economía popular y cómo desarrollan esas actividades.

En términos prácticos, la economía popular es aquella ejercida por quienes cuentan principalmente con su capacidad de trabajo y que, de manera individual, familiar o colectiva, a partir de la inventiva y la creatividad, producen y reproducen sus medios de vida (Arango *et al.* 2017; Bergesio 2016; Coraggio 1998; Nieva *et al.* 2021). Esta definición integra a una gran variedad de actividades, personas y territorios. Puede clasificarse en diversas ramas que se intersectan entre sí, en múltiples ocasiones en circuitos comerciales, tramas de valor e inclusive en las mismas familias: textiles, recicladores, actividades sociocomunitarias, servicios variados, producción y venta de productos agropecuarios, artesanales, gastronómicos, entre muchos otros posibles, ya sea que se desarrolle de forma organizada o individual. Por lo tanto, se trata de aquel trabajo autogestionado que permite generar ingresos propios, siendo esto una característica definitoria.

Esta visión contrasta con aquella que considera que quienes ejercen la economía popular forman parte de una gran masa de trabajadores excluidos y precarizados, indicando que se debe tener

[1] Tal como se denomina la revista que editan Riless y Ruess. <https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia>.

[2] Flyer de difusión de la 16° Feria de intercambio de reproductores ovinos y llamas, en Cangrejillos, Yavi, Jujuy, 2022.

precaución en el discurso para no romantizar la pobreza y la marginalidad, de manera de reivindicarla como un horizonte y no luchar por la reconstrucción del entramado industrial y el aparato productivo resulta contraproducente. Tal como llama la atención un entrevistado: «nosotros no queremos sobrevivir, queremos vivir» (E7).

La diversidad de actividades socioeconómicas y la heterogeneidad de sus formas asociativas (desde individuos aislados, hasta grandes organizaciones) imponen complejidad a un sector que se encuentra radicado en múltiples escenarios territoriales: grandes ciudades, cordones hortícolas, pequeños pueblos, etcétera. Teniendo en cuenta esto, es posible distinguir grandes grupos, según sus características socioeconómicas.

- *Productores de la agricultura familiar*: que se dedican a la producción agrícola de alimentos (ya sea horticultores, ganaderos, apicultores, etcétera). Las trayectorias de algunos de estos actores tienen que ver con la migración y problemáticas relacionadas como la trata y la explotación (tal como se relata en la entrevista 5). Algunos son «trabajadores golondrinas, medianeros, porcentajeros o changarines, en familia o agrupados, con parcelas pequeñas y galpones precarios» (E8).

En el ámbito rural también es común que exista la pluriactividad, es decir, trabajadores que realizan actividades en la pequeña producción agropecuaria pero también en distintos empleos en el ámbito privado (en general changas que tienen que ver con oficios) o en empleos asalariados estatales (E4). Muchos son migrantes o descendientes de migrantes (E8 y E5) y se encuentran o encontraron en algún momento de su trayectoria de vida en condiciones de explotación (E5).

Su principal preocupación es el acceso a la tierra, que tiene como problemáticas relacionadas el despoblamiento del campo y la inserción de capitales nacionales y extranjeros monopólicos y oligopólicos de monocultivos industriales (E4). También se mencionan el poder de los intermediarios, la regulación en la estructura de los costos, créditos y recursos del sector o el valor de la fuerza de trabajo que debería tomar en el producto final para la venta (E5).

- *Cooperativas y asociaciones*: cartoneros, recicladores, carreros y recuperadores urbanos: Su trabajo surgió en la crisis de 2001, cuando la gestión de los residuos urbanos empezó a considerarse, primero, como un recurso, luego como un trabajo (E2). Sus tareas están dirigidas a recuperar residuos factibles de ser reciclados, por lo que reducen el volumen de residuos que llegan a los centros de disposición final. Por lo tanto esta actividad tiene consecuencias en el cuidado del ambiente, que son reconocidas por ellos y ellas (E1).

La economía popular también se compone de productores textiles, de manufactura y calzado, también de cooperativas de construcción y albañilería. En general se conforman a partir de cooperativas que se construyen a partir de la reivindicación colectiva de su trabajo.

- *Actividades sociocomunitarias*: quienes realizan tareas de cuidado y organización sociocomunitaria en los barrios o en zonas rurales: encargadas de merenderos y comedores, promotores de salud y género, docentes de bachilleratos o escuelas populares y quienes brindan clases de apoyo y la formación sindical de otros trabajadores de la economía popular. Es el caso de la Escuela Nacional de Organización comunitaria (ENOCEP), una iniciativa de la Secretaría de Formación de la UTEP que se fundó con el objetivo de fortalecer a los movimientos populares contribuyendo a la formación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, dirigentes y militantes.

- *Vendedores callejeros y ambulantes*: tanto de su manufactura (artesanías, alimentos, plantas, etcétera) como quienes comercializan productos industrializados o de distinta índole. Podemos encontrar en el espacio público también a los artistas callejeros (E10). Estas actividades fueron de las más afectadas por la pandemia y el ASPO, ya que se prohibió la circulación del espacio que resulta fuente de trabajo.

Para recapitular, se advierte la gran diversidad de actividades que se nuclean bajo la denominación de economía popular, siendo ésta una de sus características, ya que su conjunto no está definido por sus elementos, sino por la forma en que se expresan y relacionan.^[3]

Algunas de las características intrínsecas de la economía popular (trabajo y ganancias en el día, importancia del espacio público, limitada capacidad de ahorro y crédito) se transformaron en problemas por las medidas de prevención del COVID-19, más que nada por el ASPO.

4.4 Problemáticas en pandemia

«... la pandemia lo que desnudó es el grado de desigualdad que existe en los sectores populares y las mayores dificultades en donde el Estado está cada vez menos presente... hubo una política de cuidado hacia los sectores populares pero terminó siendo insuficiente en términos de poder responder...

[3] Hay otro tipo de actores, como las fábricas recuperadas, que suelen tomarse como ejemplo de economía popular. En el repositorio PIRC-ESA hay dos entrevistas que responden a estas características, pero no las hemos tomado en cuenta ya que en ella las personas entrevistadas no se caracterizan a sí mismas como trabajadoras de la economía popular, lo que sí sucede en los otros casos.

las ollas [de los comedores] son cada vez más grandes, los sectores están más empobrecidos, hay una situación muy compleja en términos sociales» (E6).

Coincidiendo con la idea general de que la pandemia mostró lo que estaba oculto a ojos vista, como la desigualdad social creciente y la desprotección hacia algunos sectores populares, se dio «la visibilización de todo eso que se viene diciendo hace tanto tiempo: parece que se olvidaron de los pobres» (E2), mostrando que, aunque «tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos gente que sabe cultivar, vive en el campo y [aun así] tenemos gente con hambre» (E4).

Un aspecto fundamental de este velo que se corrió fue la magnitud de la cantidad de personas trabajando en la economía popular, que llegó a superar los cálculos del gobierno nacional en relación al IFE y que puso sobre la mesa la discusión «sobre la necesidad de un salario universal que pudiera dar respuesta» (E6).

Esta generalización de condiciones que antes estaban invisibilizadas se dio, también, respecto a los comedores y merenderos, que «reventaban» (E3) de la cantidad de gente que asistía a buscar comida. Esta triste situación tuvo efectos si se quiere positivos, ya que «siempre que vos decías comedor, alguien te señalaba, y cambiamos esa mirada, ellos ahora veían que nosotros seguíamos viniendo y empezaron a venir a ayudar o a pedir, y reconocieron que no dábamos de comer por un plan, sino porque era necesario» (E3).

La forma en cómo afectó el ASPO y el COVID-19 a diversas actividades no fue uniforme, aunque hay tópicos que se repiten: al haber «menos circulación de personas... ese material [residuo] que antes iba y recolectaba el compañero, la compañera, ya dejaba de estar» (E1) lo que redujo sus ingresos; otras personas indican que «Si bien la ayuda [IFE] fue muy necesaria, a nadie le alcanzó. Y más para la economía popular donde la mayoría de ellos trabajan en la calle y en el contacto diario con las personas» (E9). La heterogeneidad de las actividades y actores de la economía popular también se muestra en que hay quienes, dedicados a la producción de hortalizas, indican que «se vendió un poquito mejor» (E8).

Se registró una desorganización masiva de circuitos de abastecimiento, que además de los conocidos productos para alimentación de la población, tuvo otras consecuencias, como que parte de las tareas de recuperación urbana tuvieron que hacerse en las calles, volviendo a antiguos esquemas de precariedad.

Si bien el transporte de alimentos fue una tarea considerada, desde el inicio, esencial, en concreto tuvo implicancias sobre las familias productoras, ya que «toda esa gente vivía el día a día vendiendo esa verdura. Fue catastrófico» (E4), aunque se dieron situaciones dispares, ya que «mucho se dejó de producir, al cortar el tránsito, insumos claves para la producción no llegaron» (E4), pero también

se registró sobreproducción, por la falta de comercialización. Sea como fuere, «la suba desmedida de los precios de los alimentos no repercutía en la quinta pero sí en los mercados concentradores» (E5) lo que dio más poder a los intermediarios y grandes productores, un aspecto que se menciona recurrentemente (E4, E5, E8 y E66). El rol del Estado (en sus niveles locales, provinciales o municipales, dependiendo de los casos) estuvo en la organización de protocolos de comercialización (acopio, transferencia, transporte) y en la inscripción de ReNAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar) para poder «ser parte esencial» (E5).

Otro de los tópicos importantes de relación con el Estado y que se vio afectado es la escolaridad.^[4] Las implicancias que tuvo la transformación a la virtualidad de la educación fueron variadas, muy ligadas a las situaciones particulares de las familias. Por ejemplo, si bien se reconoce en general que fue una situación difícil, hay situaciones heterogéneas ligadas a los recursos, ya que aunque en el campo «no hay conectividad [y] los chicos se retrasaron» (E4) hubo niños/as que pudieron disfrutar de la relación con la tierra y la naturaleza (mi «hija andaba por la tierra a caballo para todos lados», E4) revalorizando la vida y el trabajo campesinos frente a lo vivido en las ciudades, «los del campo no pasaron ese estrés que pasaron» (E8) en la ciudad.

Así, la desigualdad educativa estuvo atravesada por desigualdades materiales (altos costos de las impresiones, la falta de internet y dispositivos adecuados, imposibilidad de padres y madres en acompañar en las tareas a sus hijos/as por atender actividades económicas (E3, E4, E26 y E63) que redundaron en «una situación amenazante, de exclusión del circuito escolar de esos chicos» (E7).

La forma en que se vivió el encierro también se consideró un marcador de desigualdad social: «siempre les decía a los chicos, no salgan, no hagan, y ellos decían: ¿y cómo los otros salen? Y yo les contestaba, pero ellos tienen una cama, tienen un respirador que el papá [Gerardo] Morales le garantiza al hijo, al nieto, lo tienen asegurado, pero vos vas a caer y no tenés nada. Es la realidad» (E3).

La violencia de género también estuvo entre las problemáticas que se complejizaron a raíz de la pandemia, atribuida al estado general de «exasperación [y] nerviosismo, de frustración» (E4). En relación a la respuesta estatal, se menciona que, así como en otros temas, «se hacen políticas que no están adaptadas al sector» (E5) por lo que se tuvieron que «armar redes de contención, abordaje y acompañamiento» (E5). En esta problemática se evidenció, como en

[4] Incluimos el tema de la escolaridad en este análisis ya que se trata de un derecho que debe brindar el Estado y que tiene una forma particular de establecerse con la economía popular.

otras lo «necesario que era que estemos organizados, porque si no estábamos organizados era ver padecer a la gente» (E3). Lo cierto es que en muchos lugares el ASPO agravó las situaciones de violencia a la vez que redujo los horarios de instituciones de asistencia.

Entre las personas entrevistadas se rescata el papel que tuvieron jóvenes que trabajaron en la organización de acopio de verdura y distribución de bolsones que se hacía, en algunos lugares como Jujuy o Mendoza, por redes sociales con y por medio de «celulares [que] estallaban todo el tiempo» (E4). Un entrevistado reflexiona que «lo que les solucionaba la vida con anterioridad ya no se la solucionaba, esa seguridad ya no estaba, así que empezaban a preguntarse “si acá no está la seguridad, ¿dónde está?”» (E4); también se menciona el papel que tomaron algunos niños frente a situaciones de desborde en tareas por parte de personas adultas: «le hacíamos a los chicos que se disfracén con una máscara, eran como astronautas porque ellos también pensaban y siempre decían, bueno a ver quién es el más macho y se vestían y se iban a dejar la comida, había que acercarla, ese es el trabajo que hacían ellos, más que la mamá y la señora que cocinaba, los chicos eran del envío que llevaba comida» (E3).

Surge de esta manera, como central, la auto-organización popular para solucionar los problemas del entorno cercano: «Fue un tiempo de volver a reinventarnos para sobrellevar este contexto de pandemia, cómo sosteníamos nuestra propia familia, tener en cuenta que aquel que cortaba el pasto, aquella que era empleada doméstica, que el que hacía sus changas, ellos [vieron] que se les dificultaba hacerlo» (E10).

Las problemáticas evidenciadas en pandemia impusieron desafíos y potenciaron alternativas que pueden ordenarse en un continuum desde soluciones expeditivas grupales: «buscamos impresoras, empezamos a ver si podíamos imprimir las tareas nosotros» (E7); a organización sectorial amplia: «cuando la circulación no estaba permitida, como organización, enviaron bolsones de verduras» (E5); aunque no todas las necesidades se resolvieron: «salimos a pelear para que haya puntos WI-FI, hubo una falta de respuesta absoluta por parte del gobierno de la provincia» (E7). También se mencionan aspectos positivos: la actividad de recuperación de sólidos urbanos «fue declarada por primera vez como actividad esencial, porque puso en relevancia la importancia del trabajo del sector» (E1).

4.5 Iniciativas en pandemia

«... fue realmente trabajar el quintuple durante la pandemia, fue mucho trabajo y búsqueda de alternativas de cada cosa» (E7).

La situación de doble crisis, sanitaria y económica, impuso una agenda de trabajo, necesidades a asistir concretamente, muy cargada para quienes tenían responsabilidades y sobre todo para quienes trabajan en el territorio, ya que se sumó la militancia, el compromiso de dar respuestas, de organizar, solucionar, acompañar, etcétera. Estas actividades se complejizaron por los efectos de las restricciones de circulación (atención a los lugares de trabajo, transporte de mercaderías, mayor demanda de algunos productos, mayor oferta de mano de obra, entre otros).

Pero la situación de excepcionalidad también permitió la concreción de procesos o relaciones igualmente excepcionales. Entre la agricultura familiar se desarrollaron mesas de diálogo intersectorial como forma de acción sobre las formas de distribución de la producción. Por ejemplo, en Jujuy, Corrientes, Buenos Aires y Mendoza, distintas organizaciones de productores articularon para la venta y distribución de bolsones de frutas y verduras económicos para lo que pudieron tramitar un permiso especial: «nosotros dijimos un día lo vamos a hacer y punto, ya está, y quién te va a sacar si estás repartiendo alimento?» (E4). El tránsito muchas veces lo hacían por caminos internos locales. En algunas localidades se instalaron puntos de comercialización con el objetivo de que «el productor gane un poco más y el consumidor pague un poco menos» (E8). En Corrientes, con el objetivo de visibilizar su problemática algunos productores hicieron «donativos de productos, verdura, tomate de todo tipo» (E8) poniendo uno o dos cajones cada uno, enfatizando que no les provoca un costo importante «porque vos cosechás y por ahí tirás dos o tres cajones y... bueno. Eso mismo le podría hacer falta a mucha gente» (E8). Es decir, desde las organizaciones se apuntó no solo a resolver lo urgente, tal como se mencionó en el apartado anterior, sino que se trabajó para esbozar respuestas a problemas estructurales. Lamentablemente no se registra que estas acciones hayan quedado de manera permanente (aunque quizás haya algún caso específico) sino que fueron respuestas ante la crisis, un orden distinto que permitió ensayar respuestas novedosas. Si este significó solo una ruptura que se restableció, o fue una instancia liminar entre dos estados distintos, es algo que todavía no podemos verificar.

Entre los vendedores ambulantes, una de las principales estrategias en la etapa más dura del ASPO radicó en la utilización masiva de redes sociales para promocionar y comercializar sus productos y servicios, antes realizados en espacios públicos, de esa forma consiguieron reemplazar «esa venta directa que vos ponías a tus servicios [para] hacerle ahora un [servicio a] domicilio» (E10).

Entre las actividades relacionadas al reciclaje y la recuperación urbana, en algunas provincias como Buenos Aires, se avanzó en la articulación con el Estado, con programas de contención a sus

trabajadores y de erradicación de basurales a cielo abierto (E1), con «el desarrollo de espacios de centros de reciclado con inclusión social [ya que] no podemos pensar el reciclado sino pensamos en los compañeros y compañeras que están cartoneando en la calle, que son el actor principal para que eso funcione» (E6).

A nivel estatal nacional, en la provincia de Buenos Aires se realizó «un programa de asistencia crítica y directa» (E5) con el objetivo de que quienes se dedicaban a la floricultura tuvieran una alternativa en la producción de hortalizas hasta que retomaran su cultivo tradicional.

Una de las respuestas estatales más mencionadas y valorizadas fue el IFE, ya que permitió a muchas personas, individualmente, invertir ese dinero en comercios o proyectos productivos, además de destinarlo a gastos del hogar. A nivel grupal, o de organizaciones, el IFE también se empleó como capital a invertir, por ejemplo, entre un grupo de mujeres con un taller de costura de Chaco: «el IFE y después también el Potenciar Trabajo, nuestras compañeras lo habían invertido [en] hacer una vaca, lo que sería una cajita, así avanzamos. Gracias a esa reivindicación nos evitamos de ser manteros,^[5] a hacer hoy en día desde un ambo de trabajo... a una ropa» (E10). Estas chaquetas se comercializaban a otras organizaciones, por lo que la inversión tuvo un doble sentido.

A nivel estatal el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, implementó una batería de políticas de transferencia de recursos. Uno de ellos fue el programa Acompañar,^[6] que consistía en la mitad de un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses. Este programa se implementó con mayor o menor eficacia en las distintas regiones del país «donde hoy en día las compañeras están cobrando un subsidio o una ayuda a nivel nacional para que esas compañeras puedan salir adelante y se ve porque yo tengo casos» (E63).

En síntesis, los testimonios recuperan la importancia del nivel supra-personal, colectivo o institucional, ya que «la seguridad justamente estaba en que todos nos agarremos de las manos, la pensemos todos juntos» (E4). Ya sea con respuestas que provienen del Estado, como el IFE o el Potenciar Trabajo, que se reconocen como herramientas (además de auxilios económicos) o por acciones coordinadas

[5] El término «mantero», se refiere a quienes no cuentan con una mínima estructura fija o móvil para colocar los productos a la venta y solo despliegan una manta de tela en el piso. Entonces, los/as manteros/as en general forman parte de un grupo con poco o nulo capital, siendo una actividad que se percibe como poco deseable a la que se llega en situación crítica.

[6] https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_la_s_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar.

y llevadas a cabo desde las organizaciones sociales y ámbitos comunitarios. Es «que hoy por hoy las organizaciones pudieron sostener, acompañar todo ese andamiaje que se viene desarrollando en los territorios, [evitando una situación] que pudo haber sido mucho peor» (E6).

4.6 Aprendizajes y desafíos

«... ¿vale la pena desgastar[se] y enfrentar[se] a ellos?... no vas hacer nada, no podés con ese monstruo. Lo que sí podemos es plantear una alternativa... Debemos hacer y... podemos hacer: plantear algo diferente; cuando ellos no estén mirando, donde ellos no les interesa la pequeña producción, bueno, andá ahí a trabajar» (E4).

Los aprendizajes pueden señalarse en diversas líneas. Por un lado, se destacan visiones colectivas que se profundizaron, como por ejemplo aquellas que unen la producción con la soberanía alimentaria, de la mano de la producción agroecológica para «cambiar el modelo productivo» (E5), como en el caso de La Plata en el que la entrevistada rescata que se pudo «recuperar los saberes que tienen los trabajadores y trabajadoras» (E6) para lograr una «sistematización y una recuperación de esos saberes productivos que se están desarrollando en los territorios a través de estas distintas experiencias que pudimos construir» (E6). La visión de que la pandemia impuso una urgencia ambiental, se registra en las personas referentes de organizaciones ligadas a la agricultura familiar, por ejemplo en Corrientes o Jujuy al proponer «dejar de pensar en eso de destruir el planeta» (E8), ya que reconocen que «la lucha no solamente es la defensa del territorio, la defensa de nuestra cultura, no solo en la defensa de la soberanía alimentaria [también es] de hacer una producción agroecológica, de defender el ambiente, de defender los árboles nativos, el monte nativo, todo eso» (E26).

Estos mismos actores, referentes que trabajan en el campo, toman como desafíos algunos proyectos o necesidades que se evidenciaron en la pandemia, unidos a diagnósticos estructurales del sector. En este sentido, mencionan la importancia de una ley para el acceso a la tierra, «un Procrear^[7] rural que el gobierno te financie para poder comprar [tierra] y ahí si poder hacer tu casa bien, tu casa de material, que no venga un viento y te rompa, o te incendie y te quedas en la calle» (E8). La importancia de ser «dueño de la tierra [es lo que te obliga a] hacer la agroecología porque va a ser tu tierra, y no vas a

[7] El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, Procrear, dio préstamos hipotecarios a bajo interés, para la construcción de viviendas particulares. Se desarrolló a partir de 2012, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

meterle muchos químicos porque vas a fundir tu tierra y después no te va a servir» (E8); o «la idea nuestra es que estas dos granjas sean un proyecto en sí mismo, porque tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos gente que sabe cultivar» (E4).

A partir de las experiencias se llega a conclusión de «la respuesta está en el otro, la respuesta está en el trabajo comunitario, en conjunto» (E4), ya sea a través de las cooperativas, en la comercialización en red (E4), en que «cada municipio tiene que tener su abastecimiento local de producción» (E5), centros de reciclado con inclusión social (E6), tener un mercado donde «aquel compañero de reventa o aquel compañero de una unidad productiva pueda tener su lugar para exponer su trabajo y no tener ese temor de “acá no vendes más”, “acá está cerrado”, “te multamos”» (E10). En definitiva, mostrar alternativas, ya sea a través de la agroecología como las mencionadas (E5, E4, E8 y E66) u otras formas y canales para la comercialización: «la idea es poder insertarnos en lo comercial y que la venta directa de productor a consumidor sea real, no mediante intermediarios. Es difícil luchar contra un monstruo que ya está instalado» (E5).

Por otro lado, las lecciones aprendidas que se repiten en las entrevistas tienen que ver con una idea más general de la importancia de la unidad y la solidaridad; se leen reflexiones como «nos tenemos que agrupar, nos tenemos que capacitar» (E4), «Si no estamos unidos nada se puede lograr» (E12), «lo que aprendimos esa pelear por nuestros derechos» (E3) ya que la pandemia «es como que nos unió y nos hizo concientizar a los compañeros lo necesario que era estar unidos» (E3).

4.7 Relación con el Estado

«... lo político no está para ir a enfrentar a esos monstruos... [está] en la organización, en la capacitación, en los sectores donde ellos no tienen puesta la mirada... [es necesario] ser y construir poder político cosa que no haya una vuelta atrás» (E4).

Los testimonios vertidos en las entrevistas evidencian que la relación con el Estado varió dependiendo de la etapa de pandemia que se estaba atravesando (y en relación a las urgencias que se vivían), los actores e interlocutores en los distintos niveles de diálogo y negociación. A su vez, también es posible diferenciar entre las relaciones con el Estado nacional y los distintos Estados provinciales o municipales.

En este sentido, si bien existen tensiones con el Estado a nivel nacional, la relación se basó más que nada en negociaciones por el flujo de recursos a las organizaciones a partir de los referentes provinciales y nacionales. Esta situación, en la que no prevaleció el

reclamo masivo, se vio sostenida en gran medida por el IFE y otras transmisiones de recursos.

En cambio, el accionar del nivel estatal provincial y/o municipal es visto, en la mayor parte de los casos, desde un rol represivo y prohibitivo. Las tensiones en este contexto se acrecentaron hasta emerger en conflictos por territorio, recursos y, sobre todo, sentidos alrededor de la actividad, donde la cercanía territorial aumenta estas tensiones.

Además, la forma que toma la relación con distintos niveles del Estado, está supeditada a las figuras y partidos de gobierno en cada caso, aunque ésta no se da una manera uniforme ni lineal, es decir que cada actor de gobierno toma decisiones propias.

El problema fundamental con el Estado (en sus distintos niveles) se da en el marco de la lucha por el reconocimiento de la economía popular como una instancia de trabajo (tema mencionado en todas las entrevistas). Esto tiene varias aristas, ya que por un lado se habla de una falta de adecuación (o inexistencia) de las políticas al sector (E2, E5, E7, E63 y E66) o, simplemente, del reconocimiento por parte del Estado a derechos básicos y fundamentales de quienes trabajan en la economía popular (E8 y E63). En ambos casos, se identifica que el Estado fomenta la desigualdad entre sectores empresarial/privado, social/popular o urbano/campesino: «somos todo iguales, pero hay gente que más igual que otra» (E4, también en E5, E7 y E11).

Una particularidad que caracteriza a algunas de las personas entrevistadas es su carácter híbrido de trabajadores de la economía popular, referentes territoriales y funcionarias o técnicas del Estado (E4, E5, E6, E7). Este carácter decanta también en mayores instancias de diálogo y negociación y con mayores tensiones con los otros niveles estatales: «siendo productora también mi mirada es totalmente diferente a la que quizás tiene algunos de los funcionarios que ya vienen de hace mucho tiempo, [debo] comentarles la situación y ser partícipe de esas mesas de debate» (E5). En este caso, la persona entrevistada, de la ciudad de La Plata, menciona que «fue difícil entender que la burocracia que tiene el Estado es tremenda y romper con esa lógica es tremendo también» (E5), indicando que la divergencia entre temporalidades (urgencias vs burocracia) atraviesa procesos organizativos, luchas, propuestas, demandas. Es así que se remarca como central la falta de adecuación a la realidad del sector.

A su vez, también los trabajadores de la economía popular se encuentran nucleados en movimientos sociales y populares, cooperativas o también puede ser en fábricas recuperadas (UTEP, UTT, UST, entre otras) cuyos referentes integraron a su vez a raíz de la pandemia organismos sindicales a nivel nacional o mesas regionales e interinstitucionales de acción, como los comités barriales de emergencia, mesas de participación intersectorial, etcétera.

Estas cuestiones generales, heterogeneidad en cuanto a las formas de relación por los niveles del Estado y falta de adecuación de políticas y reconocimiento de la economía popular, se vieron complejizadas, obviamente, en el contexto de pandemia. Así, se sumaron necesidades de tipo sanitarias (condiciones de aislamiento, relevamientos, campañas), alimenticias y de seguridad (sobre todo por el aumento de la violencia de género intradoméstica), las que fueron contenidas (con mayor o menor eficacia) por las instancias colectivas.

Teniendo en cuenta estas observaciones, es posible indicar que la caracterización del Estado por parte del sector, no solo se relaciona por los recursos económicos que puede proveer (E4, E7, E26, E63 y E66), sino también por la legitimidad que brinda, a través de la formalización de actores y actividades (E3, E4, E7, E8, E9 y E63) que redundaron en algunos conflictos en distintas regiones; por ejemplo, se plantea que los productores son parte de la sociedad, por lo que el Estado tiene el deber de reconocerlos, registrarlos «para que nosotros podamos trabajar y formarnos. Entonces, vivir dignamente con nuestro trabajo, obviamente» (E8). La falta de registro, se da también a nivel colectivo (como trabajadores), dado que muchas organizaciones no cuentan con personería jurídica y ello les trae consecuencias en las posibilidades de acceso a recursos, ya que la personería se toma como un requisito de base (E3).

Este rol del Estado como fuente de legitimidad/formalidad choca fuertemente (desilusiona e impone luchas) con la falta de políticas adecuadas para el sector (ya sea de venta ambulante, de producción agroganadera, de cooperativas recuperadas, de servicios sociocomunitarios, etcétera). Así, prevalece la idea de que quienes están, mayormente, al frente de los organismos del Estado, municipal y provincial en este caso, son «cargos ocupados por quienes ejercen mejor de amigos y no son gente que están preparadas» (E4, también en E5, E3, E26) mostrando que «la clase política dirigencial no estuvo a la altura de lo que nos pasó» (E4).

Por otro lado, quienes se encuentran en posiciones híbridas, como referentes territoriales y funcionarios o técnicos estatales, plantean que deberían incidir en la toma de decisiones sobre el diseño y el direccionamiento de políticas públicas y, sobre todo, ser la voz de sus compañero/as, quienes al menos ahora se sienten «escuchadas, ya que se toman en cuenta las situaciones en el territorio [posibilitando] que las políticas sean efectivas también» (E5). A su vez, la participación de referentes como funcionarios nacionales hace que los recursos económicos e infraestructurales fluyan de manera más rápida hacia las organizaciones aliadas, aunque esto impone trabas en otras (E3).

De manera que, cuando sí hay una respuesta acorde a las necesidades, se identifica que proviene de tal o cual persona en un organismo particular, sin englobar al Estado en esa respuesta positiva, ya que no se trata de una política, sino una decisión concreta (ejemplificado en E3, E5, E4, E26 y E66). Esto coadyuva a visibilizar que hay técnicos/as y funcionarios/as que acompañan o ayudan, por compromiso personal y militante con el sector (en especial relacionados con la problemática de género y la producción agropecuaria).

Se mencionaron políticas públicas a nivel nacional que facilitaron el diálogo y las negociaciones con los municipios (E1 y E5) y se articularon proyectos de recuperación urbana y salud popular (E1 y E2), aunque «con el Estado nacional, dependía de las organizaciones, cada organización trabaja con su organización nacional. Si no tenés una estructura nacional, no sé si llegas tan fácil a conseguir cosas» (E3).

En algunos lugares se generaron mesas de diálogo interinstitucional con autoridades estatales, de organizaciones sociales y eclesiásticas (E2, E4 y E66), considerando que «el abordaje territorial es muy complejo y es mucho más escuchar que hablar» (E4). Entre estas dificultades se observa que la forma de relación institucionalizada con el Estado es a través de proyectos, «no es que nación va a bajar un galpón de la nada» (E1), y no por medio de políticas específicas (E5) o créditos (E4). A pesar de que «los mayores empleadores que hay acá son pequeños productores [y de que] no hay nada más político que lo productivo, no hay nada más político que desarrollar la producción» (E4).

En términos concretos analizamos los planes y programas a los que acceden los trabajadores de la economía popular. En el año 2016, en el marco de las luchas que dio la CTEP (UTEPA en la actualidad) se sancionó la ley de Emergencia Social, que estableció, entre otras acciones, la entrega de un «salario social complementario» (una transferencia monetaria que suplía la mitad del dinero necesario para la reproducción de las familias que trabajan en estas actividades). El programa vincula a los trabajadores a través de las organizaciones y cooperativas, a la vez que reconocía como trabajo a las distintas ramas productivas de la economía popular a través de la ley. Debido a la falta de registro y reconocimiento, que ya se mencionó, un gran número de personas quedaron enteramente afuera de este programa, lo que se vio reflejado en la cantidad de personas solicitantes del IFE: «La economía popular es un universo de 1.100.000 personas lo que es más o menos el salario social complementario, o sea, los titulares del Potenciar. Pero tenemos alrededor de más de 5 o 6 millones de personas que no entran al Potenciar porque todavía no están dadas las condiciones en términos de poder dar respuesta a eso» (E6). Potenciar trabajo brinda «no solamente el reconocimiento del

salario, sino también toda una serie de instrumentos que ayudan a desarrollar y fortalecer a las unidades productivas populares» (E6).

Otra vía para la formalización es el RENAF, «una herramienta que nos reconoce como productores» (E5) y que permite la bancarización y tener monotributo, aunque no es un registro compulsivo, sino voluntario (por lo que su acceso está fuertemente condicionado a la presencia de la SACFI (Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena) en los distintos territorios, así como el accionar de sus técnicos/as). Esta «formalización, en todos los sentidos va a permitir que tengamos recursos en los cuales podamos ampararnos nosotros como productores y que contadores y técnicos regularicen y asesoren sobre situaciones de cooperativas y asociaciones» (E5).

Para terminar, se registra que en algunas jurisdicciones como La Plata se desarrollan ciclos de formación y capacitaciones con cursos y otras actividades. Estas actividades son iniciativas particulares de algún organismo del Estado, alguna vez con intrincadas burocracias: «en lo que ya se está trabajando son distintas unidades de gestión, que son las unidades en donde tienen a cargo distintos titulares, o sea, donde están en relación titulares del programa, trabajadores y trabajadoras de la economía popular y que en ese marco se le dan convenios para desarrollar en un plan de las distintas capacitaciones que quieran para desarrollar o fortalecer las unidades productivas» (E6).

4.8 Comentarios finales

Este trabajo buscó exponer las principales problemáticas y dificultades a las que tuvieron que hacer frente quienes trabajan en la economía popular durante la pandemia del COVID-19 en Argentina y los desafíos que se avizoran.

Nuestra opción metodológica y expositiva buscó presentar de primera mano las voces de los sectores populares, silenciados en pandemia; esta opción de escritura y representación de la alteridad (Clifford 1991) va en consonancia con sus reclamos de reconocimiento.

La importancia y transversalidad del reclamo a la falta de reconocimiento se sustenta en que este es fuente de derechos, siendo la formalización de las actividades y ámbitos de trabajo una de las principales preocupaciones (tanto en relación a una ley de acceso a la tierra, como a poder contar con obra social y jubilación, conexiones estables de luz y agua, etcétera).

Las personas entrevistadas muestran tener un conocimiento preciso de las herramientas (registros, normas, oficinas, etcétera) y canales (programas, proyectos, convenios, etcétera) que necesitarían o que tienen a disposición para relacionarse con el Estado. En esta

relación resalta la identificación de tal o cual persona en un organismo particular, sin englobar al Estado en esa respuesta positiva, ya que no se trata de una política, sino una decisión concreta. Esto coadyuva a visibilizar que hay técnicos/as y funcionarios/as que acompañan o ayudan, por compromiso personal y militante con el sector y que tiene resultados de importancia cualitativa. Y se trata de funcionarios con trayectoria (técnica y/o militante) en la temática, en general en oficinas nacionales.

La diferencia entre canales y herramientas nacionales en contraposición a las provinciales o municipales se percibe en las decisiones que pueden tomar o no cada uno: los últimos más relacionados a cuestiones de índole territorial (donde la puja por el poder territorial se hace más palpable, [González 2021](#)) en tanto los primeros más orientados a resolver problemáticas generales (como el ReNAF, ReNaTEP, o la ley de acceso a tierras).

Una de las conclusiones que todas las entrevistas mencionan, en tanto respuestas a los problemas durante la pandemia y como desafío a fortalecer, es la auto-organización popular como opción práctica y concreta ante un Estado que da respuestas a destiempo, de carácter parciales y sin considerar la diversidad de situaciones regionales y sectoriales. Las experiencias son la asistencia en materia de salud, alimentación, comercialización y necesidades escolares.

Los testimonios evidencian que la relación con el Estado varió dependiendo de la etapa de pandemia, los actores e interlocutores en los distintos niveles de diálogo y negociación. Los problemas acuciantes de los primeros meses, resueltos de manera excepcional, fueron dando lugar a otros de carácter estructural, que muestran un marco temporal de conflicto que trasciende la pandemia (tal como el acceso a la tierra, créditos o formalización, por ejemplo).

Otra problemática estructural, y que aparece como transversal a diferentes sectores económicos y clases sociales, fue el aumento ostensible de la carga familiar de las mujeres en tareas de cuidado familiar y comunitario.^[8] En el sector de la economía popular, a ello se debe sumar el aumento drástico de situaciones de violencia de género que fueron escasamente atendidas por los organismos estatales y, en algunos casos, solo encontró contención en las redes comunitarias más cercanas.

En general, y como síntesis, se evidencia que las urgencias y necesidades de la economía popular versus los tiempos burocráticos del Estado, son parte de un problema a resolver, situación que ven con mayor claridad quienes son referentes y funcionarios/as, por su conocimiento de ambos campos. Y es el Estado en su nivel provincial

[8] Si bien estos temas no se analizan en profundidad en este trabajo, es relevante señalarlos, ya que aparecen en las entrevistas.

y municipal el que aparece, para los propios actores de la economía popular, como un obstáculo para el desarrollo de la actividad. En este sentido, recordamos lo que expresó una vendedora callejera en Jujuy en el 2020: «No pedimos trabajo, pedimos que nos dejen trabajar».

Referencias

ARANGO, YUDI; PABLO IGNACIO CHENA Y ALEXANDRE ROIG

- 2017 «Trabajo, ingresos y consumos en la economía popular», en *Cartografías del Sur*, n.º 6, referencia citada en página 95.

BERGESIO, LILIANA

- 2016 *Espacio, relaciones sociales y consumo en la economía popular. El caso de las ferias comerciales urbanas en San Salvador de Jujuy (Argentina)*, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Jujuy, referencia citada en página 95.

BERGESIO, LILIANA Y NATIVIDAD GONZÁLEZ

- 2020 «Economía popular y herramientas estatales: la (in)habilitación de ganarse la vida en tiempos de pandemia», en *Pensando la pandemia en/desde Jujuy: reflexiones situadas*, coord. por Liliana Bergesio y Lucas Perassi, San Salvador de Jujuy: Tiraxi Ediciones, págs. 163-169, referencia citada en página 91.

CLIFFORD, JAMES

- 1991 «Sobre la autoridad etnográfica», en *El surgimiento de la antropología posmoderna*, comp. por Carlos Reynoso, Barcelona: Gedisa, referencia citada en páginas 92, 108.

CORAGGIO, JOSÉ LUIS

- 1998 *Economía popular urbana: una nueva perspectiva para el desarrollo local*, Buenos Aires: UNGS, referencia citada en página 95.

GONZÁLEZ, NATIVIDAD

- 2021 «El territorio de los actores o la multiterritorialidad programática: una visión antropológica del territorio», en *Antropología e interdisciplina. Reflexiones y prácticas en las fronteras*, comp. por Liliana Bergesio; Federico Fernández y Omar Jerez, San Salvador de Jujuy: Tiraxi, págs. 203-233, referencia citada en página 109.
- 2022 «La economía popular en la frontera. Lo que develó la pandemia», en *Pensar la pandemia para comprender la sociedad: abordajes socioeconómicos y socioculturales*, San Salvador de Jujuy: Tiraxi, págs. 53-66, referencia citada en página 91.

NASH, JUNE

- 2008 «Comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros», en *Dependencia y explotación en las minas bolivianas de estaño*, Buenos Aires: Antropofagia, referencia citada en página 92.